

Señores

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa

Referencia: Insistencia por mora en resolver recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución ST-0999 de 2025

Yo, ANA PATRICIA JULIO GORDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.038.105.839, en calidad de representante legal del Consejo Comunitario Afroverde, comunidad étnica afrodescendiente asentada en el municipio de Puerto Asís (Putumayo), actuando en ejercicio de los derechos fundamentales de petición, debido proceso, consulta previa, participación efectiva y protección del territorio y la identidad cultural, me permito presentar INSISTENCIA FORMAL ante la omisión administrativa en que ha incurrido esa entidad al no resolver el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la Resolución ST-0999 del 14 de julio de 2025.

Debe señalarse que ha transcurrido un término ampliamente superior al legalmente establecido sin que se haya proferido decisión de fondo respecto del recurso presentado oportunamente, lo cual configura una clara mora administrativa, en abierta vulneración de los artículos 23, 29 y 209 de la Constitución Política, así como de los principios de celeridad, eficacia y economía que rigen la función administrativa, y de las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que establecen la obligación de resolver los recursos dentro de los términos perentorios previstos por la ley. Esta situación no constituye un simple retardo procedimental, sino una verdadera denegación material de justicia administrativa, en tanto impide el acceso efectivo a una decisión que permita controvertir la negativa del derecho fundamental a la consulta previa.

La omisión en resolver el recurso mantiene vigente una decisión administrativa que niega la procedencia de la consulta previa, lo que implica una afectación continua, actual y grave de los derechos fundamentales del Consejo Comunitario Afroverde, particularmente los derechos a la consulta previa, a la participación efectiva, al territorio, a la identidad cultural y a la autonomía étnica. Tal como fue expuesto en

el recurso interpuesto , la comunidad cuenta con una presencia real, activa y verificable dentro del área de influencia del proyecto, con usos espirituales, culturales, económicos y sociales del territorio que fueron incluso constatados en campo por la propia autoridad, lo que activa de manera directa la obligación estatal de garantizar el derecho a la consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT, al bloque de constitucionalidad y a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En este contexto, la inacción administrativa no es neutral, sino que permite la consolidación de actuaciones que pueden generar afectaciones irreparables sobre el territorio y la pervivencia cultural de la comunidad, en desconocimiento del principio de precaución y del principio in dubio pro communitas, conforme a los cuales toda duda razonable sobre la afectación de un pueblo étnico debe resolverse en su favor, activando las garantías de protección y no prolongando indefinidamente la indefinición. La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, ante escenarios de incertidumbre sobre la afectación, el Estado debe adoptar medidas de protección oportunas, y no incurrir en omisiones que agraven el riesgo.

Adicionalmente, la mora injustificada en resolver los recursos administrativos puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria por incumplimiento de los deberes funcionales, en tanto desconoce los principios de la función administrativa y compromete la garantía efectiva de derechos fundamentales de especial protección constitucional, como lo son los derechos de las comunidades étnicas.

En mérito de lo expuesto, solicito de manera respetuosa pero enfática que se proceda a resolver de manera inmediata y de fondo el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la Resolución ST-0999 de 2025; que, en caso de no acceder a la reposición, se remita sin dilación el expediente a la instancia superior para decidir la apelación conforme a derecho; que se informe el estado actual del trámite indicando las razones de la mora; y que se adopten las medidas necesarias para evitar la consumación de un daño irreparable mientras se decide de fondo el recurso.

Se deja expresa constancia que, de persistir la omisión administrativa, esta parte acudirá a las acciones constitucionales y disciplinarias correspondientes, incluyendo la acción de tutela por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de petición, así como la presentación de queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

Atentamente,

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Ana Patricia', enclosed within a circular stamp or seal.

ANA PATRICIA JULIO GORDO

C.C. 1.038.105.839

Representante Legal

Consejo Comunitario Afroverde